

## COMENTARIOS

### SE RETRASA EL PARTO DE LA NUEVA CONSTITUCION

El 28 de marzo pasado el pueblo fue convocado para elegir la Asamblea Constituyente, con el propósito de restaurar el Estado Social de Derechos interrumpido por el golpe militar del 15 de octubre de 1979.

Las elecciones se plantearon como un principio de solución a la grave crisis que golpea a la sociedad salvadoreña. La tesis fundamental de quienes propusieron la vía electoral para dirimir en ese momento el conflicto político-militar se apoyaba en la obtención del consenso popular y la legitimidad del poder alcanzado a través de comicios verdaderamente libres.

Se creía que una Asamblea Constituyente electa dentro de un clima de absoluta libertad y respeto al sufragio sentaría las bases de un régimen estable, empeñado en lo fundamental en devolver a los ciudadanos la seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizar a la sociedad. Una constiyente con el poder discrecional que el pueblo le delegue, se llegó a argumentar, es capaz de edificar la paz, construir los caminos de la democracia, y enarbolar los grandes principios de la unidad nacional por encima de los partidos, grupos políticos y económicos, estamentos y clases que anteponen sus intereses a los de la totalidad de la nación.

La tesis electoral, en el drama salvadoreño, llegó de fuera. Fue obra de simplistas y "expertos" que desconocen la profundidad del problema salvadoreño. Personas que llegan, hablan con unos cuantos, toman datos y luego elaboran recetas probablemente buenas para pequeños condados del oeste de EEUU. Así se elaboró la tesis electoral, sin advertir que para consolidarla era necesario primero la creación de espacios políticos y aperturas efectivas para que to-

dos los sectores participaran en los comicios de marzo. El gobierno norteamericano presionó para que se efectuaran lo más pronto posible las elecciones, en la seguridad de obtener un respaldo masivo al programa de reformas económico-sociales y en la seguridad también de parar las pretensiones y disputas por el poder de parte de sectores de ultra derecha y ultra izquierda. Una vez electa la Constituyente, se indicó, nadie pensará en la toma del gobierno por la vía del golpe militar o del triunfo armado de la guerrilla. El voto emitido será suficiente para decir a unos y a otros: esto queremos, esta es la decisión popular. La salida electoral teóricamente no era intrínsecamente mala y nadie, de manera sensata, podría oponerse a ella. El hecho mismo de abultar el número de votantes, de exportar la imagen de participación masiva del pueblo, era sin duda básico para demostrar que en El Salvador la democracia estaba en marcha y el proyecto político-militar de la guerrilla no tenía sentido, ni razón ética e histórica de proseguir. Se exaltó el 28 de marzo, día de las elecciones, como el inicio de una nueva vida. Se callaron los fraudes electorales, posteriormente denunciados por el PCN, ARENA, PDC y AD y se entró a una etapa de aparente unidad nacional. Los pactos post-electorales, más allá de la posibilidad de elaborar una Constitución Política moderna, no han logrado superar la crisis con las elecciones. Por el contrario, después de marzo el país conoció de cerca la miseria de los arreglos entre los líderes y los partido de derecha, arreglos a espaldas del pueblo que han empantanado la situación.

Es evidente que el planteamiento electoral fue prematuro, por lo menos en dos sentidos: a) las reformas estructurales: agraria, bancaria y de

comercio exterior no se habían consolidado y estaban en su etapa más crítica y b) la lucha política entre la ultra derecha y la ultra izquierda había derivado al terreno de máxima confrontación armada, colocando al aparato militar del Estado en una situación difícil, pues era confrontado por ambas fuerzas, en razón, creemos, del programa reformista iniciado en octubre de 1979. Llamar a elecciones para definir los límites de las reformas propuestas por la FF.AA. era exponer el movimiento octubrista a un rechazo manipulado por el gran capital que tiene el control de los medios de comunicación social y posee, además, la capacidad de imponer las reglas del juego político. La derecha reaccionaria pudo, como lo ha hecho siempre, movilizar masas no conscientizadas y llevarlas en camiones para votar en contra de los cambios. Esto parecerá paradójico a los asesores norteamericanos que recomendaron ir a los comicios. Ignoraban, es obvio, que en un país donde nunca ha habido elecciones libres y donde las formas de dominación están intactas, es lógico que se vote por el orden imperante, en tanto el nuevo que se pretende implantar todavía está en el papel o es parte de una promesa más de la FF.AA.

El resultado de marzo, era de esperarse: un

fallo contradictorio, producto de la división interna de las derechas entre quienes y para quienes se hizo la elección. Recuérdese que la izquierda moderada del FDR, en particular del social demócrata MNR, no participó por falta de garantías para sus líderes y por considerar que las elecciones en ese momento significaban un paso hacia atrás en cuanto a las posibilidades de transformación social. La derecha, ya entonces aglutinada en ARENA, fue clara y terminante: "Vamos a votar contra la demagogia de los cambios, vamos a votar contra la Democracia Cristiana que ha engañado al ejército y lo ha embaucado en las reformas". En una palabra, la vía electoral era darle cancha a los intereses oligárquicos, fuertes todavía y decididamente en contra de las tres reformas básicas que la Junta Revolucionaria de Gobierno había iniciado.

En la tesis de la salida electoral había una buena dosis de ingenuidad. Creían sus patrocinadores (EE.UU./FFAA/DC) que los líderes de la oligarquía habían aprendido la lección, en tanto el levantamiento popular no es sólo un fermento de agitación ideológica, sino una necesidad primaria de las masas por modificar los espacios de explotación laboral y la urgencia de cambiar las formas de propiedad rural, excesivamente concentradas



en pocas familias. La DC/FFAA/EE.UU. estaban seguros que la oligarquía y sus aliados subalternos al interior del país, habían comprendido que los cambios eran imprescindibles, una especie de seguro de vida para que el sistema en su totalidad no fuese sustituido de raíz. Y en esto también se equivocaron los "expertos" y los políticos de la junta democristiana.

En una sociedad largamente bajo control y administración del ejército, los sectores del gran capital utilizan todos los medios para ganar adeptos y simpatizantes a su causa en las filas militares. Esos medios suelen ir del ofrecimiento de una cuota de gobierno, a los más descarados elogios sin excluir el chantaje, el soborno, la corrupción y, desde luego, la amenaza del comunismo. La oligarquía sabe llegar a los elementos menos conscientes de la FFAA. Esta es una explicación válida a la derechización del movimiento del 15 de octubre, dando paso a la salida de sus líderes o dejando en los altos mandos a aquellos considerados menos peligrosos. Para las elecciones de marzo, militares y civiles educados en la obediencia al gran capital no solamente se opusieron a las reformas estructurales del 15 de octubre, sino que se organizaron en partidos políticos para neutralizarlas, sabotearlas e impedirles por todos los medios, incluso el contra-golpe. Al abrirse la posibilidad de actuar en la arena electoral, los chorros de dólares traídos de Miami se dedicaron a crear una imagen adversa al cambio estructural y a envenenar la opinión pública con el fantasma del comunismo "infiltrado" en la FFAA y en la Democracia Cristiana. Se acusó a la misma embajada norteamericana de estar "contaminada" de marxismo.

En medio de una guerra civil abierta, ostensible y desafiante por parte del FDR/FMLN hacia la FFAA, la ultra derecha tomó la bandera de la paz y de la reconstrucción económica nacional. Era una arma publicitaria más en contra del gobierno militar demócrata cristiano que nunca quiso dialogar o negociar con la ultra izquierda. Los hechos han demostrado que la campaña de la derecha y la extrema derecha en la prensa, TV y radio se contraía a recuperar el poder, todo el poder, para volver al estado anterior al 15 de octubre. La presentación inteligente de los *slogans*, el contenido nacionalista, la denuncia agresiva contra la corrupción, el caudillismo dirigido hacia las masas y la oferta de paz segura y estable hizo que los votantes inclinases la balanza hacia quienes ofrecían terminar con la guerra en pocas semanas. La manipulación de

estas ideas, combinadas con el mensaje del propio Consejo Central de Elecciones que enfatizó: "tu voto la solución", "tu voto la paz", "tu voto la libertad", crearon las condiciones de un 28 de marzo en que lejos de definirse las cosas, las empeoraron. Señalaremos por qué.

En primer lugar, las reformas prometidas por la Proclama de las FFAA han quedado estancadas, anuladas por la burocracia y el papeleo de los nuevos dirigentes, contrarios a todo cambio.

En segundo lugar, la paz no ha sido lograda ni por medio de las armas ni por medio del diálogo: en el año 1982 las acciones bélicas en las zonas rurales han sido altamente destructivas en vidas humanas y en recursos materiales: la muerte, el desamparo, el hambre asolan a millares de trabajadores, desplazados de sus sitios de trabajo a causa de los enfrentamientos.

En tercer lugar, la crisis económica erosiona cada vez más al sistema productivo, al grado que la deuda interna y externa son las más altas en la historia del país; a la inflación y recesión económica se agrega ahora la virtual devaluación de la moneda, la huida de capitales, la fuga de divisas y la falta de inversión privada. El costo de la guerra aumenta la dependencia externa, y pone al país en riesgo de involucrarse en un conflicto centroamericano de grandes proporciones, sin beneficio alguno para El Salvador, dado que estas "guerras inter-regionales" son parte de la política de las grandes potencias en su afán de predominio y hegemonía mundial.

En cuarto lugar, la crisis política es ahora más profunda en la derecha y en el centro: la guarda por los cargos públicos ha puesto al desnudo las ambiciones personales de grupo, y el poco patriotismo para enfrentar la realidad de una nación sumida en la miseria, la inseguridad, el deterioro moral y la franca disolución de las familias, refugiadas alrededor de San Salvador y de pequeñas ciudades, o en busca de nuevos horizontes por diversos países, en un éxodo triste y lamentable.

El brillo del 28 de marzo ha sido opacado por sus beneficiarios. Otra vez el pueblo ha estado más allá de sus dirigentes, de sus partidos. El engaño ha traído desaliento a las masas proletarias y ha abierto los ojos a los sectores medios que confiaron en el voto como principio de solución. Incluso se ha mentido en el propósito fundamental de emitir una nueva Carta Magna con la urgencia que el caso demanda y en la promesa de retornar a un Estado de Derecho. Hasta el

momento la Constituyente no ha presentado a la consideración pública el anteproyecto de la futura Ley de Leyes del Estado, dejando que la tentación por los cargos se introduzca en la estructura del gobierno, a nivel de los poderes ejecutivo y judicial, volviendo incoherente y caótica la administración pública.

Estamos para finalizar el año 1982 y la Constitución que regirá el nuevo orden de cosas no se ve por ninguna parte. No se siente la decisión ni la voluntad de aprobar la Carta Magna en un contexto que supere los partidismos, los intereses mezquinos de grupos económicos contrarios a las reformas, los esquemas rígidos e inflexibles de unos y otros sectores políticos. Vemos sólo ambición de mando, riñas entre los directivos de los partidos, zancadillas entre funcionarios públicos, y una artritis congénita en la toma de decisiones respecto a los problemas nacionales. El forcejeo por los puestos públicos, la obsesión en no acceder a las demandas populares, la negativa a diálogos superiores sobre la forma de resolver las cuestiones de la guerra y la paz, todo indica la ineficacia e inoperancia del cuerpo constituyente, electo en marzo de 1982.

Mientras el país se desangra en una guerra civil de tremendas consecuencias, las salidas políticas se vuelven inviables por la carencia de visión, de ánimos resueltos a romper con sectarismos y dogmatismos. El desplome de las esperanzas y expectativas del 28 de marzo, en la línea de ir al reencuentro de todas las fuerzas políticas y sociales, crea desilusión en el pueblo. Se vuelve al punto de partida: la crisis del modelo económico y del sistema político, exige medidas patrióticas que transformen y modernicen a la nación salvadoreña, democratizen las instituciones y regeneren lo que ahora es injusticia institucional-

zada, demagogia y violación de los derechos humanos, intervención grosera de potencias extranjeras en nuestros asuntos internos.

Hace falta meditar, reflexionar, sobre las responsabilidades que se contrajeron el 28 de marzo. Una de ellas, la de celebrar un nuevo pacto social, esto es: la aprobación de una Carta Magna que sea la expresión de un proceso de reconciliación nacional, de libertad, paz y justicia social. No pecatarse de la gran hipoteca que pesa sobre la República es alentar el odio, avivar las pasiones y esperar con molicie la destrucción de la patria. Más de 60 mil muertos de 1979 a 1982 reclaman desde sus tumbas una solución política racional y efectivamente democratizante. Tanta sangre derramada exige, como lo señala Su Santidad Juan Pablo II, el cambio de los métodos violentos por los pacíficos. Exige, desde luego, la consolidación de las reformas económicas y sociales, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo y el progreso para todos los salvadoreños; en síntesis, cumplir con los cambios del 15 de octubre de 1979 y extender el olivo de la paz a los combatientes de los bandos en pugna.

Con Pacto de Apaneca o sin él, urge el retorno a la constitucionalidad, a la seguridad jurídica, a un régimen de garantías sociales y políticas. Ello ayudaría, sin duda, a que la izquierda también se anime a participar en el juego político dentro de nuevas reglas y perspectivas. No hay que prolongar más la agonía. La Constitución debe discutirse y aprobarse antes de marzo de 1983, con vistas a pacificar y construir una sociedad libre, justa y educada.

C.M.D.

20 de diciembre de 1982.